

Procesos de configuración de identidades políticas en Argentina y Uruguay. Los límites de una implantación post-neoliberal desde una mirada de-colonial¹

Inés Ksiazienicki Viera ²

Resumen

La ponencia realiza un abordaje comparado de procesos de construcción de identidades políticas en la Argentina post-neoliberal protagonizada por los gobiernos peronista-kirchneristas y el Uruguay signado por el ascenso de los gobiernos de la izquierda frenteamplista.

Plantea una reconstrucción de esas identidades- centrandó la atención en las definiciones de las fuerzas políticas en el gobierno y el movimiento sindical como actor político- desde la revisión de los usos, y formas de resignificación, de conceptos políticos vinculados a las tradiciones del peronismo y la izquierda.

Reconoce la centralidad que en la articulación de los proyectos políticos de esos gobiernos adquiere la noción de progreso y su relación con la recuperación de un “Estado social” que encarna la superación de la fase neoliberal; y analiza la proximidad de esta forma de Estado con la idea de oposición- confrontación o conciliación interclasista.

Avanza sobre el cuestionamiento acerca de la posibilidad de implantación de estos gobiernos de transformaciones culturales que trasciendan los períodos de gobierno aludidos, imprimiendo líneas de larga duración. En las respuestas que ensaya, posa la mirada sobre los límites impuestos por espacios de participación y prácticas de los actores políticos que in-visibilizan sujetos y alternativas políticas.

El análisis se construye en base a una propuesta de combinación teórica que se inscribe en la vertiente histórica del Neo institucionalismo- vinculada al campo de la ciencia política- y la Historia conceptual. Profundiza su eje argumentativo adoptando insumos teóricos de autores como W.

¹ Ponencia propuesta para el eje temático “Instituciones Políticas y procesos”.

² Licenciada en Ciencia Política (UdelAR). Doctora en Ciencia Política (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina). Docente e investigadora de la UNC.

Mignolo, E. Dussel, y B. Sousa Santos en tanto habilitan debates epistemológicos acerca de las condiciones de posibilidad de los análisis contemporáneos en el campo de la ciencia política.

Introducción

Al inicio del presente siglo, en Argentina y Uruguay las tradiciones políticas peronista y de izquierda son rescatadas. A partir del uso de conceptos resignificados, se construyen identidades ideológicas apelando a lo que fuera sustrato de las experiencias políticas del pasado. Ello supone una adecuación de los fundamentos originales de las fuerzas políticas al “lenguaje del presente”, que atiende a las transformaciones en los modos de construcción política que derivan de la implementación de las reformas neoliberales.

A partir del ascenso de los gobiernos del peronismo kirchnerista y la izquierda frenteamplista, en áreas específicas de política pública como el espacio de las relaciones laborales, se procesa un distanciamiento de la dirección neoliberal; ello incluye nuevos modos de relación entre el movimiento sindical y las fuerzas políticas en el gobierno. Esos modos permiten rastrear las huellas que imprimió el legado peronista y de izquierda en las matrices políticas de los casos analizados. Ese legado estableció una dependencia de rumbo de la que difícilmente los gobiernos analizados podrían haberse distanciado. La re-activación del rol del Estado en las relaciones laborales, y la delimitación de vías que institucionalizan mecanismos de negociación colectiva y diálogo social, responde a los postulados que, históricamente, el peronismo y la izquierda reivindicaron en coincidencia con el sindicalismo. A partir de esas decisiones, el movimiento sindical se fortalece como actor político.

Las construcciones discursivas del peronismo kirchnerista y de la izquierda frenteamplista se aproximan en su afán por materializar un distanciamiento respecto a tendencias neoliberales. Las respuestas que plantean frente a los efectos devastadores de las últimas crisis socioeconómicas que afrontaron Argentina y Uruguay los vinculan con la encarnación de un “nuevo tiempo”.

Al asumir el gobierno encabezado por Néstor Kirchner la situación socioeconómica se articulaba a partir del legado de la crisis desatada en el año 2001. Al aumento significativo de la cantidad de trabajadores desempleados y al deterioro de las condiciones salariales y laborales en general se agregaba lo que fue identificado como “descreimiento” respecto a la política como vía para dar respuesta a las necesidades que surgían de esas condiciones sociales. La debilidad de la legitimidad del gobierno en sus inicios, pauta por un 22 por ciento de apoyo electoral en la primera y única ronda electoral, constituyó un dato de relevancia para el análisis de su conformación identitaria.

El reconocimiento de una construcción política asentada en la tradición peronista implicó que autores como J. Godio sostuvieran que la aspiración de Kirchner era “conformar un gobierno nacionalista, neodesarrollista y peronista superador de las prácticas de la vieja política” (Godio, 2006: 49)³. En la prensa se aludió a que el discurso de asunción presidencial había exhibido un “tono de peronismo laico”, y que el nuevo gobierno era pensable como portador de un discurso “socialdemócrata” que apelaría a la reconstrucción del “Estado de bienestar como nostalgia del país cohesionado...”⁴

En Uruguay, la victoria electoral que permitió a Tabaré Vázquez encabezar el primer gobierno nacional de la izquierda frenteamplista fue, en sus términos, “fruto de una larga historia de sueños, de esperanzas, compromisos y sacrificios de muchas generaciones de uruguayas y uruguayos”, que suponía una apuesta por “ensanchar, alargar la democracia y la participación ciudadana” de la mano de una pretensión fundacional, de constituir “un gobierno de cambios, cambios necesarios” que vienen a responder al legado que, sobre “los más débiles”, dejó el derrumbe de “un proyecto de país”. Las respuestas que definió se vincularon con una mirada hacia la utopía, que posa “los pies en la realidad” garantizando “cambios responsables”, que son “cambios progresivos”, “con sentido de nación”. Vázquez reivindicó una búsqueda dirigida a “que todos tengamos las mismas oportunidades”, que implicaba emprender una lucha contra “las

³ Godio sostuvo, también, que el gobierno encabezado por N. Kirchner podía caracterizarse como una “revolución desde arriba” que, entre sus características, había constituido su elenco de gobierno sin una previa negociación con las corporaciones empresarias ni con el sector sindical y se había recostado sobre el Partido Justicialista, que fue elemento central de su proyecto político (Godio, 2006: 59).

⁴ Página 12, 25/05/2003.

causas de la pobreza” alcanzando la más urgente “devolución” a aquellos representados como “los más pobres” del país.

Resignificación conceptual y permanencia de arreglos institucionales

Es posible entender que las alianzas entre partidos y sindicatos se vincularon, históricamente, con definiciones ideológicas e identitarias; y que ellas se imprimieron como una marca indeleble sobre las definiciones del presente. Analizamos la experiencia política reciente argentina y uruguaya ⁵desde una combinación de elementos de la “historia conceptual”, o “historia de los conceptos”, y del neo institucionalismo histórico, entendiendo que la articulación de los vínculos entre esos actores puede rastrearse acudiendo a una mirada de largo plazo.

El rescate de los conceptos que en el pasado nutrieron las tradiciones peronista y de izquierda, en Argentina y Uruguay, ⁶ acude a la comprensión de las definiciones de nuevas identidades partidarias e ideológicas. Ellos son asociables a un carácter polisémico y a una pretensión de generalidad, derivan de la adscripción a un término de todo un “contexto de experiencia y significado sociopolítico, en el que se usa y para el que se usa una (la) palabra” (Koselleck, 1993: 117). Los conceptos son concebidos como aquellos que dotan a los sujetos de “herramientas para

⁵ Aludimos con “experiencia política reciente” a los períodos que se inauguran con la asunción de los gobiernos encabezados por Néstor Kirchner en Argentina y Tabaré Vázquez en Uruguay, que comprenden los años 2003- 2007 y 2005- 2010, respectivamente.

⁶ Para reconstruir lo que entendemos como “tradición peronista” en Argentina, a través de la revisión y análisis del uso de conceptos, el período escogido será el comprendido entre los años 1943 y 1955, correspondiente a la emergencia del peronismo y la construcción de una concreta identidad sindical de lado del mismo. En el caso uruguayo, la “tradición de izquierda” será asociada al período comprendido entre 1965 y 1994. El corte temporal efectuado opta por situar como punto de inicio el año en que se desarrolla el Congreso del Pueblo, y no el año 1971 de fundación del Frente Amplio, entendiendo que es aquél el más significativo para analizar la configuración identitaria que irá conformando al futuro Frente de izquierda de lado de la consolidación identitaria del movimiento sindical unificado, que alcanzará tal condición en 1966. Escoger el año 1994 como final del período encuentra su fundamento en el avizoramiento de cambios relevantes en la identidad ideológica del Frente Amplio con la apertura del espacio “Encuentro Progresista”.

comprender el sentido de su accionar” (Palti, 2001: 16); pueden ser entendidos como “instituciones”⁷ en que el pasado, el presente y el futuro se combinan.

Posar la mirada en los modos en que resultan redibujadas ciertas ideas políticas implica rastrear los usos que se hacen de los conceptos; esas redefiniciones tienen efectos sobre las acciones y expectativas sociales. La “utilización ideológica” de los conceptos resulta una noción central, en tanto aquí se pretende incursionar en el análisis de las construcciones ideológicas. Se entenderá por construcción ideológica el entramado de conceptos que se combinan como resultado de resignificaciones del pasado, que articulan un entretejido que configura el espacio de expectativas políticas de los actores. Los conceptos son pasibles de ser “usados en la lucha política” como apelaciones o como “pares contrapuestos” que dan cuenta de bandos que “permiten identificarse a sí mismo y al adversario”; será en este sentido que relacionaremos los usos conceptuales con la noción de identidad.

Una de las conjeturas que guía este abordaje sostiene que la construcción ideológica e identitaria del peronismo kirchnerista y la izquierda frenteamplista, a comienzos de este siglo, se relaciona con las redefiniciones de los vínculos de esas fuerzas políticas con el movimiento sindical.

Tejiendo lazos con la centralidad de los conceptos en una mirada histórica, la vertiente neo institucionalista por la que se opta habilita una mirada sobre los procesos de conformación de alianzas entre actores políticos, y sobre los modos en que se trazan estrategias (Pierson; Skocpol, 2008: 7). Las políticas públicas laborales pueden ser leídas como resultado de un proceso de definición de proximidades entre los partidos y el movimiento sindical, en el que las instituciones juegan un rol determinante. En el curso que siguieron esas definiciones ha sido posible identificar una apuesta de re- construcción de Estados interventores, próximos a la idea de “Estado social”, articulación viable desde una particular concepción de progreso. Esas nociones rectoras operaron a su vez, y en ambos casos, en el constreñimiento a definiciones disruptivas de largo plazo en sentido a una matriz cultural asentada. Por su parte, tales limitaciones, entendemos,

⁷ Esta apreciación corresponde a Elías Palti y refiere a la perspectiva desarrollada por Gehlen. Ver Palti (2001).

contribuyeron al retorno, más pronunciado en el caso argentino, de una dirección restauradora del orden neoliberal.

Interesa divisar cómo las configuraciones institucionales del pasado moldean las interacciones entre los partidos y el movimiento sindical, afectando los procesos de reconstrucción de identidades partidarias e ideológicas. Estas consideraciones se asientan sobre ideas como las rescatadas en escritos de R. Rhodes: “Las raíces del presente están profundamente enterradas en el pasado [...] la historia es la política del pasado y la política es la historia del presente” (Sait, 1938 en Rhodes, 1997: 2). Las imbricaciones a las que es posible dirigir la mirada para comprender sus procesos de resignificación en el espacio público, como las que tejen los partidos políticos con el movimiento sindical, se analizan desde las condiciones que imprimen los contextos sociopolíticos en que se inscriben. Asume, entonces, un rol central un modo de análisis que rescata trayectorias del pasado para comprender las formas que adquieren fenómenos políticos de reciente configuración.

El espacio político al que se alude reivindica, al ser analizado, la relevancia de entramados institucionales. Interesa resaltar la importancia de los “sistemas de creencias e incluso valores” para remitir a los modos en que se desempeñan los protagonistas del espacio político; este “mundo simbólico” puede entenderse que “sólo se puede construir teóricamente en el nivel institucional” (Friedland; Alford, 1999).

Gobiernos de pretensión post- neoliberal. Definiciones a comienzos del siglo XXI

El escenario que comienza a ser protagonizado por las fuerzas políticas progresistas en la región a comienzos de este siglo dista de aquel en que se construyeron, originariamente, sus “identidades y prácticas discursivas” (Mallo, 2006: 56). Ello implicó en Uruguay necesarios procesos de reconfiguración de las “prácticas políticas” que transcurrieron de lado de reconstrucciones identitarias. S. Mallo plantea que a los procesos referidos acudieron “presiones de la Sociedad Civil” traducidas en reclamos por una “nueva forma de hacer política” (Mallo, 2006: 56). Operó,

entonces, un movimiento conducente a forjar un “acuerdo social por el crecimiento económico y el desarrollo humano” que si bien no desplazó la noción de lucha de clases como “motor del desarrollo histórico” sí implicó un corrimiento vinculado con la política práctica y el trazado de alianzas (Garcé y Yaffé, 2005: 84).

Las transformaciones apuntadas, que implicaron corrimientos de las adscripciones ideológicas con que tradicionalmente se pudo asociar a la izquierda en Uruguay, permitirán aproximar algunas definiciones al caso argentino. La adopción de ideas como la posibilidad de forjar un “pacto social”, desplazando la noción de la irreconciliable oposición de clases, permitirá fortalecer modos de participación del movimiento sindical asociados al diálogo social y recordar las formas que el peronismo trazara en relación al espacio laboral. No obstante, cabe recordar que se produce un fenómeno de dos aristas: por un lado el movimiento sindical uruguayo se fortalece por la expansión de las afiliaciones auspiciada en el período, encontrando espacios más amplios de participación que le permitirán reafirmarse como actor político de relevancia; por otro, al mantener discursivamente los postulados que conformaran, históricamente, su identidad ideológica y que permitieran representarlo como un sindicalismo clasista, se alejará en ocasiones de decisiones adoptadas por el Frente Amplio en el gobierno.

Tanto en el caso argentino como en el uruguayo los gobiernos encabezados por Kirchner y Vázquez adoptaron una impronta fundacionista. Según Mallo, los desafíos de estos gobiernos se relacionan con ejercitar modos de pensamiento de “la sociedad desde lo público” y de ellos mismos “en lo público”; definiciones que suponen nuevas articulaciones de la noción de ciudadanía (Mallo, 2006: 56). Ello implica desmembrar y problematizar los “discursos clásicos de la izquierda” en un espacio en el que se proyectan nuevas vías de relacionamiento “entre estado y capitalismo” (Mallo, 2006: 56).

A inicios de este siglo, el ascenso del gobierno peronista y de izquierda, de pretensión post-neoliberal, conllevó una transformación de los espacios de participación sindical. Los cambios producidos pueden comprenderse atendiendo a respuestas que los elencos de gobierno dieron a las reivindicaciones históricas del sindicalismo, que imposibilitaron la reinstalación de políticas de flexibilización o desreglamentación del espacio laboral. En el caso argentino la formación de esas

reivindicaciones es asociable a la irrupción del peronismo, que auspició un tipo particular de sindicalismo imbricado en el movimiento político, un tipo de “sindicalismo corporativo”. De una mirada histórica, las marcas de la configuración sindical desde el nacimiento del peronismo presentan diferencias con el sindicalismo uruguayo que fue un sindicalismo de “tipo clasista” y que convivió, sin trazar alianzas, con el gobierno del tradicional Partido Colorado en su tendencia neobatllista. La imbricación del sindicalismo con las fuerzas políticas de izquierda se profundizó en la década del sesenta, comenzando a definir la proximidad ideológica e identitaria que perduraría hasta el presente.

Los modos en que el peronismo en Argentina y la izquierda en Uruguay trazaron lazos con el movimiento sindical a mediados del siglo pasado definieron líneas de larga duración, imprimieron un patrón que afectó a las definiciones adoptadas en la década de implantación de reformas neoliberales, y también a sus formas de articulación a comienzos de este siglo. En la fase neoliberal, el movimiento sindical argentino se disoció en múltiples expresiones que abarcaron desde los espacios de confluencia con la tendencia aperturista a posicionamientos claramente opositores. El movimiento sindical uruguayo mantuvo su unidad y se constituyó en el principal actor opositor a las reformas impulsadas por el gobierno encabezado por L. A. Lacalle.

Las configuraciones disímiles del sindicalismo argentino y uruguayo en la hora neoliberal respondieron a diferentes formas de resignificación de los vínculos históricamente construidos con el peronismo y la izquierda. El viraje que asumió el peronismo como movimiento político, que supuso la expansión de mecanismos clientelares de intermediación política y una progresiva pérdida del rol del movimiento sindical en sus estructuras, pudo ser diferenciado de la confrontación que la coalición de izquierda desplegó junto al sindicalismo uruguayo que fortaleció sus reivindicaciones clasistas.

Al iniciarse los gobiernos del peronismo kirchnerista y la izquierda frenteamplista volvieron a definirse los lazos de las fuerzas políticas con el movimiento sindical. Ello implicó una reconstrucción identitaria e ideológica, en un proceso en el que fue central el rescate y la resignificación de los conceptos usados en el pasado. La apelación a la tradición del peronismo en

Argentina y de la izquierda en Uruguay interpeló al movimiento sindical, que debió articular nuevas definiciones.

Los gobiernos encabezados por Kirchner y Vázquez adoptaron una impronta fundacional que pretendió presentarlos como nuevos elencos, diferenciándolos de aquellos que con sus políticas habían conducido a las profundas crisis de comienzos del siglo veintiuno. Ambos definieron la construcción de bloques sociales alternativos. En el caso argentino, se convocó a actores no contenidos en las estructuras sindicales, como el movimiento piquetero, mientras que en el uruguayo el llamado estuvo dirigido, fundamentalmente, al sindicalismo.

La primera experiencia del Frente Amplio en el gobierno nacional implicó la concreción de transformaciones que venían procesándose en el seno de la fuerza política, vinculadas a una moderación ideológica y a un ensanchamiento de su base social de referencia. Es posible identificar semejanzas en ese proceso con definiciones del peronismo kirchnerista relacionadas, fundamentalmente, a la idea de concreción de un pacto social que desplazaba la noción de la irreconciliable oposición de clases. El uso del concepto de “pacto social” habilitó, en ambos casos, espacios de participación del sindicalismo asociados al diálogo social. Los gobiernos encabezados por Kirchner y Vázquez reforzaron la participación del movimiento sindical como actor político al recuperar canales limitados por anteriores gobiernos.

El vínculo de hermandad entre el movimiento sindical uruguayo y el Frente Amplio continuó una vez que la fuerza política asumió el gobierno. No obstante, las transformaciones referidas motivaron una definición de las políticas más moderada de la que históricamente se había postulado. El sindicalismo, apegado a sus reivindicaciones históricas, se posicionó, en ocasiones, como opositor, y cuestionó el deterioro de los mecanismos de participación de las bases en el Frente Amplio.

Entre los conceptos de la tradición de izquierda rescatados por el Frente Amplio se identificó el concepto de “soberanía”, que se relacionó con la necesaria reconstrucción de un sentido de

nación pero redefiniéndose a la luz de los efectos de las políticas neoliberales. Se recuperó la noción que aludía a una sociedad compuesta por sectores antagónicos, con intereses excluyentes, y se expresaba en los usos conceptuales de “pueblo” y “oligarquía”, vinculados a “trabajadores” y “empresarios”; el gobierno se presentó como representante de los intereses de la “mayoría” que era el “pueblo” compuesto por los “trabajadores”. Rescató, también, el concepto de “antiimperialismo” que pretendió plasmar la diferencia respecto a los gobernantes que impulsaron el proyecto neoliberal.

El posicionamiento del movimiento sindical respecto al gobierno lo situó como actor independiente aunque no autónomo. Su coincidencia en torno a la definición de las condiciones de actuación de los sindicatos, especialmente en la creación de un marco normativo que ampliara su acción y participación, alimentaron el histórico vínculo de hermandad. No obstante, ese escenario correspondió a los tiempos inaugurales del gobierno, luego comenzaron a procesarse diferencias vinculadas, fundamentalmente, al reclamo sindical de profundización del proceso de redistribución de la riqueza.

El sindicalismo postuló la meta de una sociedad “sin explotados ni explotadores” como elemento de su construcción ideológica. Al pensar el orden social existente desde la idea de lucha de clases el acompañamiento a un proyecto de “pacto social” se tornaba imposible. Ese modo de comprender la realidad social y pensar el espacio de las relaciones laborales pautó diferencias con el posicionamiento asumido por el sindicalismo argentino a mediados del siglo pasado, que se mantuvieron a comienzos del presente. La independencia de clase, recuperada como concepto de su tradición histórica, constituyó uno de los rasgos de la identidad del movimiento sindical uruguayo a comienzos de este siglo. Dentro del proyecto del gobierno encabezado por Kirchner la apuesta por alcanzar un acuerdo social, que derivara en un “capitalismo nacional”, tendió lazos con el actor empresarial y los trabajadores argentinos, desplazando la idea de oposición de clases.

El sindicalismo uruguayo construyó una representación del empresariado que lo ligó a intereses transnacionales y lo asoció a la oposición a los trabajadores, al sindicalismo y a los espacios de actuación habilitados por el gobierno frenteamplista. Desde esa identificación se recuperó el concepto de “oligarquía”, que entró en circulación adicionando contenidos identificables tras la

experiencia neoliberal. Los empresarios fueron vinculados a los elencos políticos de derecha, representantes de los intereses de una clase opuesta a la clase trabajadora. Al identificar la ruptura con el direccionamiento neoliberal que implicó la llegada al gobierno del Frente Amplio, el sindicalismo sostuvo que las definiciones que beneficiaban estrictamente a la clase empresaria aliada al capital trasnacional habían sido desplazadas. Los usos conceptuales de “clase empresarial”, “imperialismo” y “gobiernos de derecha” se vincularon con la idea de un horizonte de “soberanía nacional” asociado al superador proyecto de la izquierda frenteamplista. El empresariado reforzó la imagen que el sindicalismo construyó de él al cuestionar, definiendo como “ideológicas”, las políticas públicas del gobierno que interpretaba contrarias a sus intereses corporativos.

El movimiento sindical nucleado en el PIT- CNT se afirmó sobre el principio de unidad y sobre la articulación de una identidad de clase que fue posible mantener trascendiendo reivindicaciones sectoriales vinculadas a los trabajadores organizados. La ocupación de cargos en el gobierno pautó, también, uno de sus rasgos fundamentales, desde el que fue posible contrastar con el caso argentino. Los sindicalistas que resultaron electos y asumieron cargos políticos no representaban en esos espacios al movimiento sindical sino a la fracción política de pertenencia. En las primeras experiencias peronistas, los sindicalistas que asumieron cargos de gobierno representaban allí al movimiento sindical, además de pertenecer al movimiento peronista, asumían una inscripción dual.

Con el ascenso del gobierno encabezado por Kirchner, fue posible identificar una ruptura con esa forma y, por consiguiente, una similitud con la que adoptó el gobierno frenteamplista. La condición de sindicalistas fue un dato de relevancia para comprender su convocatoria a ciertos espacios de participación, no obstante, su rol como representantes estuvo más vinculado a la condición dentro de la fuerza política que a la de dirigente sindical.

La inclusión de sindicalistas en cargos de gobierno no había sido una práctica frecuente en los períodos protagonizados por los partidos tradicionales en Uruguay. El reconocimiento del Frente Amplio de la contribución histórica del sindicalismo a su formación y cimentación como fuerza política derivó en la convocatoria una vez que se alcanzó el triunfo electoral. No obstante, pudo

rastrearse una mucho más profunda presencia de dirigentes sindicales en los partidos que conformaban el Frente Amplio que en el gobierno frenteamplista, también hubo casos de dirigentes sindicales que optaron por permanecer como representantes de los trabajadores en lugar de asumir los cargos políticos para los que habían sido electos, en tanto la decisión de ocupar cargos de gobierno se asoció al cese de la representación como dirigentes sindicales.

En relación a su organización interna, el rápido incremento de las afiliaciones contrastó con la lenta redefinición de la estructura de funcionamiento del sindicalismo uruguayo. Uno de los problemas fue que los trabajadores de reciente sindicalización carecían de formación en la tradición del sindicalismo y no apreciaban de la misma forma que los sindicalistas más viejos la centralidad de la unidad como elemento constitutivo de su identidad. Las discrepancias entre sectores del sindicalismo respondieron a las diversas lecturas acerca del apego o alejamiento del gobierno respecto a lo postulado por el Frente Amplio en su programa. No obstante, fueron zanjadas mediante el secretariado ejecutivo del PIT- CNT que operó como síntesis ideológica de las diversas corrientes.

El sindicalismo uruguayo sostuvo que, en materia de inserción internacional, debían profundizarse los vínculos con el resto de países latinoamericanos. Desde el gobierno frenteamplista se manejaron otras alternativas, como la concreción de un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Las diferencias entre el movimiento sindical y el gobierno de la izquierda frenteamplista respondieron a distancias ideológicas que, en opinión de sindicalistas, eran producto de la configuración policlasista del Frente Amplio. En respuesta a ello, el sindicalismo planteaba la necesidad de instaurar una hegemonía de la “clase obrera”, desestimando la posibilidad de trazar acuerdos con los sectores portadores de intereses opuestos a los de los trabajadores.

Fue posible divisar dos lecturas del movimiento sindical referidas al desempeño del Frente Amplio en el gobierno. Una de ellas enfatizó en la ampliación de espacios de participación en el ámbito de las relaciones laborales y en la mejora que ello supuso en las condiciones de los trabajadores, la otra puso especial atención en la carencia de definiciones en materia de redistribución de la riqueza y de concreción de reformas de tipo estructural. Los artífices de esas lecturas encarnaron

diversas corrientes, cuyo peso relativo dentro del movimiento sindical no se equiparaba al de las tendencias ideológicas dentro del Frente Amplio.

El movimiento sindical se distanció de la reforma del Estado promovida por el gobierno frenteamplista; reivindicó una profundización del rol de la banca estatal en procesos de desarrollo productivo, y una revisión de las formas del sistema financiero. Promovió, también, una reforma del sistema de seguridad social, oponiéndose a la permanencia del sistema mixto. Desde el PIT-CNT se planteó la necesidad de ampliar los espacios de participación de los trabajadores en la construcción de políticas públicas, reafirmando discursivamente la asociación entre los trabajadores y la “voluntad popular”. El espacio más conflictivo de articulación del gobierno con el sindicalismo se asoció a las negociaciones con los sindicatos del sector público. Ello no solo pauteó un alejamiento respecto al gobierno sino su constitución como el más opositor contingente del sindicalismo.

La explicación que el movimiento sindical dio sobre las conquistas alcanzadas a partir de 2005 atribuyó un papel fundamental a la llegada al gobierno de la izquierda frenteamplista, imaginando que el retorno de los partidos tradicionales significaría un retroceso de las transformaciones iniciadas en el ámbito laboral. A pesar del reconocimiento de las políticas laborales, planteó que debía procesarse una profunda transformación del modelo productivo uruguayo que implicaba la revisión de las políticas económicas. Los virajes que el gobierno frenteamplista realizó respecto al posicionamiento anterior del partido, referido a la construcción de un modelo socio- económico alternativo, motivaron también un distanciamiento del movimiento sindical, que mantuvo desde el tiempo de su unificación la coherencia con su proyecto político de largo plazo. Fue posible reconocer que el debate ideológico se trabó en el gobierno, en tanto que continuó en el movimiento sindical y en el Frente Amplio. No obstante, los sectores que en la fuerza política desplegaron planteos que coincidían con el sindicalismo, como el Partido Comunista, no eran los que más peso tenían en la coalición gubernamental.

El gobierno encabezado por Kirchner construyó su identidad ideológica desde una recuperación de la tradición peronista. Al comienzo articuló un proyecto político transversal que dio respuesta a los

amplios sectores sociales afectados por la crisis socioeconómica desatada en 2001, que habían iniciado modos de protesta diferentes a los instaurados por los trabajadores formales sindicalizados. Esa apuesta no implicó una prescindencia de la estructura del Partido Justicialista, con ella comenzaron a cimentarse los lazos en un segundo momento, al iniciarse un proceso de recuperación y exaltación de los símbolos peronistas. Incluso la noción de transversalidad fue definida por los protagonistas del gobierno como una característica intrínseca del peronismo. Se afirmó, entonces, el modo particular de relacionamiento con el movimiento sindical, condicionado por las marcas que trazó el peronismo histórico.

Kirchner clamó por una vuelta a las fuentes del peronismo que iniciara un proceso de autocrítica. Hubo un rescate del concepto de “pueblo” en la construcción discursiva del peronismo kirchnerista que reinstaló la asociación con el concepto de “trabajador”. El concepto de “cooperación de clases” se vinculó con la convergencia de trabajadores, empresarios y Estado en la construcción de un “capitalismo serio” que representaba la encarnación de lo post- neoliberal. El concepto de “inclusión social” formó, también, parte de las definiciones del peronismo kirchnerista, relacionado a la meta de reinstalar la “movilidad social ascendente” y de fortalecer a la clase media. El gobierno sostuvo, rescatando un principio postulado por Perón, que la política social destinada a reducir la exclusión debía ser la política económica. Postuló la necesidad de un Estado planificador y redistribuidor, coincidiendo con lo expresado por el Frente Amplio y el sindicalismo uruguayo, aunque agregando el concepto de “Estado inteligente”.

El movimiento sindical argentino, nucleado en la CGT, reivindicó la unidad, que se concretó en el período encabezado por Kirchner; no obstante, debió convivir con la alternativa CTA. El gobierno rescató en la definición de su proyecto político lo postulado por la fracción de la CGT vinculada al MTA desde que se desató la crisis de 2001. Comprender los efectos que tuvo la implantación neoliberal en Argentina sobre el movimiento sindical fue central para analizar su configuración a inicios de este siglo. El desmembramiento del sindicalismo, la emergencia de expresiones alternativas para la contención y representación de los trabajadores, y las transformaciones en el espacio de las relaciones laborales profundizaron un escenario complejo para el movimiento sindical como actor político.

Las señales que el gobierno encabezado por Kirchner dio a la CTA dieron cuenta de una inicial apertura al pluralismo sindical. No obstante, la cimentación de los lazos con el sindicalismo peronista congregado en la CGT, que surgiera como correlato de la decisión de no prescindencia de la estructura del PJ para la construcción política e identitaria del gobierno, animó un alejamiento de la central alternativa. Se reforzó, entonces, la apelación a la tradición del peronismo histórico, y el rescate de los modos en que se trazaran los vínculos con el sindicalismo. La postergación del reconocimiento de la personería gremial a la CTA constituyó una clara señal de la intención de no modificación de las condiciones para la conformación y acción sindical que habían sido trazadas varias décadas antes. La posibilidad de convergencia del peronismo kirchnerista con un sindicalismo que asumió reivindicaciones clasistas se limitó, y ello pudo comprenderse por los usos que la fuerza política desplegó de los conceptos de “cooperación de clases” y “pacto social”.

La CTA adoptó una postura en la que el reclamo de un proceso de redistribución más profundo fue central, que la alejó de la dirección adoptada por la política económica del gobierno. Su oposición al actor empresarial, al que definió como “burguesía”, y asoció a “la derecha” planteando la noción de “enemigo de clase”, lo alejó del proyecto de “pacto social” protagonizado por la CGT. Planteó, además, como horizonte, un modelo de organización social post- neoliberal y post-capitalista. Su capacidad de contener a trabajadores afectados por la implementación de políticas neoliberales se vio trastocada cuando las condiciones del espacio laboral fueron transformadas por el gobierno del peronismo kirchnerista, que auspició una recuperación de puestos de trabajo y un proceso de formalización laboral. Fue, entonces, pensable una “pérdida de sentido” de su articulación anterior.

Como efecto de las políticas implementadas entre 2003 y 2007, las condiciones del espacio de las relaciones laborales se modificaron, auspiciando un profundo aumento de la densidad sindical. Aunque no se encontrara unificado, el movimiento sindical argentino comenzó a recuperar espacios de participación y a fortalecerse como actor tras el impulso que adquirió la negociación colectiva, y las redefiniciones normativas en el ámbito laboral. Una diferencia notable entre los casos analizados fue que en Uruguay el aumento de la conflictividad laboral, que se produjo luego del primer año de gobierno, estuvo acompañada del despliegue de posicionamientos sindicales

opositores a algunas de las medidas adoptadas por el gobierno, mientras que en el caso argentino, a un primer momento pautado por la no coincidencia entre el sindicalismo y el elenco encabezado por Kirchner siguió una convergencia que implicó que el movimiento sindical cegetista articulara las demandas de los trabajadores moderando posturas opositoras, e incluso desarticulando el movimiento piquetero como expresión de los precarios o desocupados.

Los sindicatos del sector público, especialmente los nucleados en la central alternativa, plantearon reclamos al gobierno desde el comienzo del período; se pudo identificar en ese sentido una similitud con el caso uruguayo. En el caso argentino, la presencia de comisiones internas y cuerpos de delegados disputó la representación de los trabajadores y la capacidad de articulación de sus demandas con las cúpulas sindicales; su expansión dio cuenta de una profundización de las distancias entre la dirigencia y las bases. El apoyo del actor empresarial fue más claro que en Uruguay. La coincidencia con el proyecto re industrializador propulsado por el gobierno lo embarcó en la promoción de la construcción del “capitalismo nacional” basado en la referida noción de “pacto social”. La CGT y la UIA concretaron esa pretensión de pacto, fue así que se definió un escenario muy diferente al uruguayo, en que la posibilidad de concertación, en esos términos, entre el PIT- CNT y el empresariado quedó desplazada entre 2005 y 2010. El gobierno frenteamplista no tuvo un impulso industrializador y ello motivó una vinculación diferente con el sindicalismo y el actor empresarial.